

INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL “ACUERDO GENERAL SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL-INTERPOL”, APROBADO EN MARRAKECH, MARRUECOS, EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025.

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo del epígrafe, que se encuentra sometido a consideración de la H. Cámara, en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15 y 54, N° 1 de la Constitución Política de la República.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes, y previamente al análisis de fondo de este instrumento, se hace constar lo siguiente:

1) Que la idea matriz o fundamental de este Proyecto de Acuerdo es aprobar el “ACUERDO GENERAL SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL-INTERPOL”, APROBADO EN MARRAKECH, MARRUECOS, EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025.

2°) Que este proyecto de Acuerdo no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni normas que deban ser aprobadas por quórum calificado.

3°) Que la Comisión aprobó el Proyecto de Acuerdo por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

(Votaron a favor las diputadas señoras **Del Real**, doña Catalina; **Muñoz**, doña Francesca; **Parisi**, doña Zandra y **Pizarro**, doña Lorena, y los diputados señores **Araya**, don Cristián; **Beltrán**, don Juan Carlos; **Díaz**, don Jorge; **Martínez**, don Cristóbal y **Schubert**, don Stephan).

4°) Que se designó como Diputada Informante a la señora **PARISI, doña Zandra.**

II. ANTECEDENTES

Señala el Mensaje, con el cual S.E. el Presidente de la República somete a consideración del Congreso Nacional este Proyecto de Acuerdo, que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) es una organización internacional con sede en Francia, integrada actualmente por 196 Estados miembros, entre ellos Chile. Su finalidad, agrega, es promover la cooperación policial internacional y la asistencia recíproca entre las autoridades policiales de los distintos

países miembros. Para estos efectos, en cada Estado miembro funciona una Oficina Central Nacional encargada de coordinar dicha cooperación.

El Mensaje señala, además, que, en el desarrollo de sus funciones, INTERPOL realiza periódicamente diversas reuniones internacionales, entre ellas la Asamblea General y otras instancias vinculadas a la Organización. Tales actividades implican el desplazamiento de funcionarios, delegados de los países miembros, bienes, haberes y documentos entre distintos territorios, requiriendo un régimen jurídico que garantice la independencia, eficiencia y seguridad necesarias para el adecuado desarrollo de dichas actividades.

Asimismo, destaca que, a diferencia de la mayoría de las organizaciones internacionales, INTERPOL carecía hasta ahora de un acuerdo uniforme sobre privilegios e inmunidades. En ausencia de dicho instrumento, la Organización debía negociar acuerdos específicos con cada Estado anfitrión de sus reuniones, generándose regímenes jurídicos diversos y negociaciones complejas para cada evento. Esta situación incluso podía afectar la capacidad de INTERPOL para desplegar equipos de apoyo en situaciones de urgencia.

En consideración a estas circunstancias, hace presente, la Asamblea General de INTERPOL, reunida en Marrakech, Marruecos, entre los días 24 y 27 de noviembre de 2025, adoptó el Acuerdo General sobre los Privilegios e Inmunidades de la Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL, instrumento que fue suscrito por Chile el 24 de noviembre de 2025.

III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ACUERDO

El texto del Acuerdo se estructura sobre la base de un Preámbulo y veintidós artículos.

El Preámbulo recuerda las finalidades de la Organización Internacional de Policía Criminal-INTERPOL, entre ellas promover la más amplia asistencia recíproca entre las autoridades de policía criminal de los Estados miembros y contribuir a la prevención y represión de las infracciones de derecho común, dentro del marco de la legislación nacional de los Estados miembros y con respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, reafirma los principios y propósitos contenidos en el Estatuto de la Organización.

Igualmente, destaca que, de conformidad con los artículos 30 y 31 del Estatuto de INTERPOL, los Estados miembros deben otorgar las facilidades necesarias para el desempeño de las funciones del Secretario General y del personal de la Organización, así como cooperar activamente en las actividades que esta desarrolla. En este contexto, se reconoce la necesidad de conferir privilegios e inmunidades a representantes de los Estados miembros, integrantes de determinados órganos y funcionarios de INTERPOL, precisando que estos beneficios no se conceden en beneficio personal, sino para asegurar el desempeño independiente y eficiente de sus funciones.

Finalmente, el Preámbulo reafirma el respeto a los principios de igualdad soberana, integridad territorial, independencia política de los Estados y no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

El Artículo 1 contiene diversas definiciones necesarias a los efectos de la aplicación del Acuerdo. Entre ellas, lo que deberá entenderse por “Acuerdo”, “archivos de la OIPC-INTERPOL”, “Estatuto”, “sistema de Información de

INTERPOL”, “miembros de determinados órganos de INTERPOL”, “funcionario de la OIPC-INTERPOL”, “actividades oficiales”, “locales de la OIPC-INTERPOL”, “bienes, fondos y haberes”, entre otras.

En el numeral 2 del mismo Artículo se lista determinados términos, de la letra a) a la g), indicando que los mismos tienen el significado que les asigna el Estatuto.

A su turno, el Artículo 2 fija el Objeto y finalidad del Acuerdo, esto es el establecimiento de los privilegios e inmunidades de la OIPC-INTERPOL, a los fines de que pueda cumplir los cometidos dispuestos en su Estatuto y en particular para facilitar la cooperación policial internacional y las actividades de los órganos enumerados en su Artículo 5.

Seguidamente, el Artículo 3 refiere a la Personalidad jurídica de la Organización, señalando que la misma está dotada de personalidad jurídica internacional y gozará de capacidad jurídica para a) contratar, b) adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y c) entablar procedimientos judiciales.

Luego, el Artículo 4 alude a la inmunidad de jurisdicción y otras acciones, estableciendo la regla que la OIPC-INTERPOL, así como sus fondos y haberes en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad de jurisdicción, ya sea en el marco de un proceso judicial o de otro proceso legal.

A continuación, la norma establece diversas excepciones a esta inmunidad: la primera de ellas se refiere a los casos en que se renuncie expresamente a esa inmunidad, disponiendo en todo caso que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no implica la renuncia a la inmunidad relativa a las medidas ejecutorias, para las que será necesario una renuncia separada. La siguiente, trata los casos de ejecución de un laudo dictado en virtud de uno de los mecanismos de resolución de controversias previsto en el Artículo 15 (a), esto es, controversias resultantes de contratos en los que la OIPC-INTERPOL sea parte. La última, se consigna los casos en que se deriven las acciones civiles ejercitadas en los casos de daños ocasionados por accidente provocado por un vehículo de motor u otro medio de transporte propiedad de la OIPC-INTERPOL o utilizado en su nombre.

El numeral 2 de esta disposición señala que los bienes, fondos y haberes de OIPC-INTERPOL, serán inviolables. Los locales, los bienes y los fondos y haberes de la misma, donde sea que se encuentren y quienquiera los tenga en su poder, gozarán de inmunidad contra toda forma de registro, incautación, confiscación, requisa, expropiación y contra toda otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.

Más adelante, el Artículo 5, regula la inviolabilidad de los archivos y la correspondencia oficial haciendo aplicables normas utilizadas respecto de las misiones diplomáticas y el Artículo 6 las llamadas facilidades financieras de la OIPC-INTERPOL, en términos de que ella no quedará restringida por ningún tipo de control reglamentación o moratoria de carácter financiero. Por lo anterior, podrá recibir y guardar fondos y divisas de todo tipo y abrir, operar y gestionar cuentas bancarias en cualquier moneda (Artículo 6. a). Podrá, igualmente, transferir libremente sus fondos o divisas de un país a otro o dentro de un mismo país y convertir todas las divisas que obren en su poder en otra moneda, de conformidad con el procedimiento previsto por la legislación nacional aplicable (Artículo 6. b).

Por otro lado, el Artículo 7 establece la exención de impuestos para uso oficial. De acuerdo con esta disposición tanto la OIPC-INTERPOL como sus ingresos, haberes y demás bienes, estarán exentos de todo tipo de impuestos directos. Sin perjuicio de ello, la OIPC-INTERPOL no solicitará la exención de pago de derechos, impuestos o gravamen de otro tipo que únicamente constituya una remuneración por servicios prestados.

Por su parte, los artículos importados o exportados por OIPC-INTERPOL para su uso oficial estarán exentos de aranceles aduaneros, derechos de importación, impuestos y gravámenes directos e indirectos, como el impuesto al valor agregado (IVA) u otras medidas con efectos similares, así como de las limitaciones y prohibiciones aplicables a las importaciones y a las exportaciones, teniendo en cuenta sin embargo que los artículos importados en virtud de esta exención, no serán revendidos, transmitidos o enajenados de cualquier otro modo, tampoco de manera gratuita en el Estado Parte al que hayan sido importados, salvo en las condiciones convenidas con las autoridades nacionales competentes.

Respecto de las publicaciones de la OIPC-INTERPOL, estas estarán exentas del pago de derechos de aduana, así como de toda restricción y prohibición de importación y exportación.

A su vez, los Estados Partes de este Acuerdo, de conformidad con su legislación nacional, concederán las licencias y los permisos necesarios para la importación y exportación de los artículos y publicaciones referidos en el párrafo precedente. La Organización, por regla general, no reclamará una exención del pago de derechos especiales e impuestos como el impuesto al valor agregado (IVA) incluido en el precio de compra de bienes y servicios. No obstante, cuando efectúe compras por un valor sustancial que sean destinadas para su uso oficial, los Estados Parte en el Acuerdo tomarán, siempre que ello sea posible, las disposiciones administrativas oportunas para la exoneración o la devolución de un impuesto especial o del IVA (o su condonación). Los bienes en favor de los cuales se haya concedido la devolución de un impuesto especial o del IVA (o su condonación) no podrán ser vendidos, transferidos ni se dispondrá de ellos de cualquier otro modo, incluyen de forma gratuita, salvo en las condiciones convenidas con las autoridades nacionales competentes del Estado Parte concedente.

El Artículo 8 regula los viajes para asistir a reuniones estatutarias. Las autoridades competentes de los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para facilitar la entrada en su territorio y la salida del mismo, de las siguientes personas, cuando viajen para asistir a reuniones estatutarias: representantes de los países miembros y sus delegaciones; los miembros del Comité Ejecutivo y sus delegaciones; los funcionarios de INTERPOL; los miembros de la Comisión de Control de los Ficheros y las personas que ejerzan funciones oficiales para ella, los intérpretes y redactores de actas contratados por la Secretaría General; los asesores; y los observadores, especialistas y demás personas que hayan sido oficialmente invitadas a asistir a las reuniones estatutarias de la OIPC-INTERPOL o a conferencias y reuniones convocadas por la Organización o cuya presencia haya sido solicitada oficialmente por la OIPC-INTERPOL para llevar a cabo tareas en el marco de sus órganos.

Las solicitudes de visado o las autorizaciones de entrada o salida que requieren las personas indicadas en el párrafo anterior, se concederán sin costos y con la máxima celeridad de conformidad con la legislación aplicable. La

OIPC-INTERPOL se asegurará que las personas en cuestión envíen sus solicitudes de visado con la suficiente antelación.

Posteriormente, el Artículo 9 alude a los Miembros de determinados órganos de la OIPC-INTERPOL, a los cuales se les concederá dentro de los Estados Parte del Acuerdo y con respecto a ellos, los siguientes privilegios e inmunidades en el desempeño de las actividades oficiales y en los desplazamientos desde y hacia los lugares en los que se efectuará la reunión de la OIPC-INTERPOL: a) inmunidad de arresto o detención personal; b) inmunidad de inspección e incautación de equipaje; c) inmunidad contra todo procedimiento judicial, incluso cuando hayan dejado de formar parte de las categorías indicadas anteriormente, respecto de las declaraciones orales o escritas y los actos que hayan realizado en el ejercicio de sus funciones oficiales; d) exención respecto de restricciones de inmigración o requisito de registro de extranjeros aplicables en el Estado Parte que visitan o por el que transiten en el ejercicio de sus funciones; e) inviolabilidad de todos los papeles, documentos, datos, tanto en papel como en formato electrónico.

El Artículo 10, titulado Representantes de los países miembros, dispone que los representantes que hayan sido notificados a las autoridades competentes de los Estados Parte en el Acuerdo se les concederá dentro del territorio de los Estados Parte de que se trate y con respecto a ellos, los siguientes privilegios e inmunidades en el ejercicio de sus actividades oficiales y en los desplazamientos desde y hacia los lugares designados para celebrar una reunión de OIPC-INTERPOL: a) inmunidad de arresto o detención; b) inmunidad de inspección e incautación de equipaje; c) inmunidad contra todo procedimiento judicial, incluso cuando hayan dejado de formar parte de las categorías anteriores, respecto de las declaraciones orales o escritas y los actos que hayan realizado en el ejercicio de sus funciones oficiales; d) exención respecto de restricciones de inmigración o requisito de registro de extranjeros aplicables en el Estado que visite o por el cual transiten en el ejercicio de sus funciones; y e) inviolabilidad de todos los papeles, documentos y datos tanto en papel como en formato electrónico.

Las disposiciones de esta norma no se aplican a las autoridades del Estado Parte del que la persona es ciudadano o residente permanente o del que dicha persona haya sido representante.

Además, el Artículo 11 regla el régimen de los funcionarios de la OIPC-INTERPOL. En virtud de esta norma los referidos funcionarios gozarán de los siguientes privilegios e inmunidades: a) inmunidad contra todo procedimiento judicial, incluso cuando ya no tengan la calidad de funcionarios de la misma, respecto de las declaraciones orales o escritas y los actos que hayan realizado en el ejercicio de sus funciones oficiales; b) inmunidad contra las restricciones de inmigración o los requisitos de registro de extranjeros; c) exención de toda obligación de servicio nacional; d) los mismos privilegios en materia de cambio de divisas que los otorgados por el Estado Parte a los miembros de las misiones diplomáticas de rango comparable; e) para ellos y los miembros de sus respectivas unidades familiares, las mismas medidas de protección y facilidades de repatriación que las concedidas en períodos de crisis internacional a los miembros del personal de las misiones diplomáticas; f) exención de impuestos sobre los emolumentos, lo que incluye los sueldos y los suplementos de sueldos y las primas, así como las compensaciones y las indemnizaciones que reciben de la OIPC-INTERPOL.

Fuera de los privilegios e inmunidades especificados en el párrafo precedente y sin perjuicio de ellos, el Secretario General de OIPC-INTERPOL, así como todo funcionario que actúe en nombre de él durante su ausencia, gozarán mientras se hallen en el territorio del Estado Parte y durante el desempeño de sus funciones, de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades que habitualmente otorga el Estado Parte de que se trata a los enviados diplomáticos de conformidad con el derecho internacional.

Sin embargo, las inmunidades a que se refieren los numerales 1 y 2 del aludido Artículo no se harán extensivas: a las infracciones de tráfico y delitos de circulación; a las acciones civiles incoadas en caso de daños ocasionados por un accidente provocado por un vehículo de motor o un medio de transporte de propiedad de un funcionario o utilizado en su nombre.

En todo caso, la OIPC-INTERPOL determinará las categorías de funcionarios de la Organización a quienes debe aplicarse este Artículo y comunicará esta decisión a los Estados Parte. La misma instancia informará a los Estados Parte de todo cambio sustancial a este respecto.

La OIPC-INTERPOL notificará a un Estado Parte del presente Acuerdo si un funcionario viaja a su territorio o transita por él en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Con todo, los Estados Parte sólo estarán obligados a otorgar a sus propios nacionales y residentes permanentes las inmunidades especificadas en el numeral 1 a) de este Artículo, sin perjuicio de su capacidad para ampliar los privilegios e inmunidades descritos en el numeral 1) del mismo Artículo a sus propios nacionales o residentes permanentes de conformidad con legislación nacional y sujeto a su exclusivo criterio.

Por su parte, el Artículo 12, regula el derecho de estancia, según el cual ninguna persona que goce de privilegios e inmunidades en virtud del Acuerdo será obligada por la administración de un Estado Parte del mismo a abandonar su territorio durante el desempeño de sus funciones oficiales, salvo en casos en que el Estado respectivo determine que se ha producido un abuso en los privilegios e inmunidades otorgados en base al Acuerdo.

El Artículo 13 refiere a la seguridad. En efecto, a petición del Secretario General, las autoridades gubernamentales competentes de los Estados Parte del Acuerdo tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la OIPC-INTERPOL, de los representantes de los países miembros, de los miembros de determinados órganos de la Organización y de los funcionarios de la misma durante la celebración de las reuniones estatutarias y durante las demás reuniones y conferencias organizadas por la OIPC-INTERPOL en su territorio. Para ello los Estados Parte adoptarán en sus territorios todas las medidas razonables para garantizar la seguridad, la protección y la libre circulación de los funcionarios de la OIPC-INTERPOL. Lo mismo deberán hacer los Estados Parte del Acuerdo en sus territorios en relación con los locales de la Organización, protegiéndolos, de cualquier intrusión, peligro o daño, así como para velar por mantenerlos libres de perturbaciones y preservar la dignidad de la OIPC-INTERPOL y de sus funcionarios.

El Artículo 14, sobre la suspensión de los privilegios e inmunidades, prescribe que los privilegios e inmunidades que se concedan en virtud del Acuerdo, se otorgan en beneficio de la OIPC-INTERPOL y no en beneficio

personal de las personas a las que se le conceden. El Secretario General tendrá el derecho y el deber de suspender la inmunidad de todo funcionario de la Organización en aquellos casos en que ella impida el curso de la justicia y pueda ser suspendida sin que se perjudiquen los intereses de la OIPC-INTERPOL. En caso de suspenderse la inmunidad del secretario general, la suspensión será realizada por la Asamblea General de la Organización. Esta suspensión de privilegios e inmunidades deberá ser siempre expresa.

A su vez, los Estados Partes tienen el derecho y el deber de suspender la inmunidad de sus representantes en los casos en los que la inmunidad impida el curso de la justicia y pueda ser suspendida sin perjuicio del propósito con el que ella fue concedida.

Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas aquellas personas que gocen de ellos tienen el deber de respetar las leyes y las normas del territorio de un Estado Parte.

Finalmente, de acuerdo a este Artículo, la OIPC-INTERPOL cooperará en todo momento con las autoridades competentes de los Estados Parte del Acuerdo con miras a facilitar la correcta administración de la justicia, garantizar la observancia de las normas policiales y evitar todo abuso de los privilegios, inmunidades y facilidades enumeradas en el Acuerdo.

El Artículo 15 alude a la resolución de controversias con terceros. De acuerdo a su texto la Organización adoptará las medidas que considera apropiadas para la resolución satisfactoria de controversias en los siguientes casos: a) controversias resultantes de contratos en los que la OIPC-INTERPOL sea parte. Ella incluirá en sus contratos una cláusula que estipule que las controversias derivadas de la interpretación o de la ejecución del contrato se resolverán por la vía de consultas o de mediación o de no poder alcanzarse una solución amistosa a la controversia mediante un procedimiento de arbitraje acordado entre las partes; b) controversias resultantes de del tratamiento de datos en el Sistema de Información de INTERPOL; las que puedan presentarse ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL; c) controversias surgidas entre OIPC-INTERPOL y sus funcionarios que puedan presentarse ante el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo.

Por su parte, el Artículo 16 trata la resolución de controversias con un Estado Parte. Cualquier controversia entre dos o más Estados Parte o entre la OIPC-INTERPOL y uno o más Estados Parte (considerados individualmente como "la parte en la controversia" o en conjunto como "las partes en la controversia") derivada de la interpretación o la ejecución del Acuerdo, se resolverá por vía de negociación, consulta o de cualquier otra modalidad de resolución convenida.

A menos que las partes en la controversia decidan lo contrario, las controversias sobre interpretación o la ejecución del Acuerdo que no puedan resolver en conformidad a lo señalado en el párrafo precedente, se resolverán, a petición de cualquiera de las partes en la controversia, mediante un arbitraje definitivo y vinculante de acuerdo con las normas del Reglamento Facultativo de la Corte Permanente de Arbitraje para el Arbitraje entre Organizaciones Internacionales y Estados que esté en vigor en la fecha en la que el Acuerdo queda abierto a la firma.

Habrá uno o tres árbitros según convengan las partes en la controversia. Si se conviene en disponer de un solo arbitro, éste será designado de común acuerdo entre las partes en la controversia o en su defecto por el secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje.

Cuando el tribunal de arbitraje esté compuesto por tres miembros, cada parte en la controversia designará un árbitro y el tercero que presidirá el tribunal será designado de común acuerdo por los dos árbitros, o en su defecto por el secretario general de la Corte Permanente de Arbitraje. Antes de su nombramiento o confirmación, la persona propuesta como árbitro debe suscribir una declaración de aceptación, disponibilidad, imparcialidad e independencia.

Los laudos arbitrales serán definitivos y obligatorios para la OIPC-INTERPOL y toda otra parte en la controversia.

Las partes en la controversia y el tribunal de arbitraje mantendrán la confidencialidad de la sentencia y el contenido del procedimiento arbitral, lo que incluye por ejemplo todos los documentos, decisiones y laudos, salvo cuando al menos una de las partes tenga la obligación reglamentaria o una obligación legal de otra índole, de dar a conocer dicha información. En tal caso la parte en la controversia que deba dar a conocer la información consultará a la otra parte o a las otras partes antes de proceder a ello.

Por otro lado, el Artículo 17 regula las modificaciones. Al respecto, todo Estado Parte podrá proponer modificaciones al Acuerdo, dirigiendo una solicitud al secretario general de la OIPC-INTERPOL al menos ciento veinte días antes de la apertura de la siguiente reunión de la Asamblea General.

Si la solicitud reúne los requisitos establecidos el Secretario General enviará una comunicación al Comité Ejecutivo para que incluya la propuesta de modificación en el orden del día provisional de la reunión de la Asamblea General y la transmitirá a todos los Estados miembros al menos noventa días antes de la apertura de la siguiente reunión de la Asamblea General.

Las modificaciones respecto de las cuales no se pueda llegar a un consenso serán aprobadas por una mayoría de tres quintos de los Estados Parte presentes y votantes en la reunión de la Asamblea General con la condición de que esté presente una mayoría de los Estados Parte. El Secretario General transmitirá a todos los Estados Parte y a los Estados signatarios las modificaciones aprobadas por este conducto.

Una modificación entrará en vigor para los Estados Parte que la hayan ratificado o aceptado, sesenta días después del depósito de los instrumentos de ratificación o aceptación en poder del Secretario General de la OIPC-INTERPOL por las tres quintas partes de los Estados que eran Partes en la fecha de la aprobación de la modificación.

Para los Estados que ratifiquen o acepten la modificación cuando ya se haya depositado el número requerido de instrumentos de ratificación o aceptación, la modificación entrará en vigor sesenta días después del depósito del instrumento de ratificación o aceptación del Estado Parte de que se trate.

Salvo que exprese otra intención, todo Estado que pase a ser Parte del Acuerdo después de la entrada en vigor de una modificación: a) se considerará Parte del Acuerdo modificado; y b) se considerará Parte del Acuerdo sin modificar respecto de cualquier Estado Parte que no esté obligado por la modificación.

Seguidamente, el Artículo 18 regula la interpretación disponiendo que el Acuerdo no tendrá por sí mismo efecto abrogatorio o restrictivo sobre ninguna de las disposiciones del Estatuto de la OIPC-INTERPOL, ni de su Reglamento General y sus anexos.

Nada de lo dispuesto en el Acuerdo impedirá a los Estados Parte en el mismo, celebrar otros acuerdos con la OIPC-INTERPOL que confirmen, complementen, prorroguen, restrinjan, modifiquen o amplíen las disposiciones del Acuerdo.

Tampoco las disposiciones del Acuerdo limitarán ni menoscabarán en forma alguna lo dispuesto en otros acuerdos internacionales celebrados entre la OIPC-INTERPOL y un Estado Parte por estar en el territorio de dicho Estado Parte la Sede de la Organización o por haber en él oficinas regionales u otras instalaciones de la OIPC-INTERPOL. En caso de conflicto entre las disposiciones del Acuerdo y las de los acuerdos antes citados, prevalecerán las disposiciones de estos últimos.

El Artículo 19, intitulado Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, dispone que el Acuerdo estará abierto a la firma de los países miembros de la OIPC-INTERPOL desde el día en que fue aprobada por la Asamblea General, hasta dos años después de esa fecha. A su vez, se indica que el Acuerdo estará sujeto a ratificación aceptación o aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos respectivos serán depositados en poder del secretario general de la OIPC-INTERPOL. Finalmente, la norma establece que el Acuerdo estará abierto a la adhesión, debiéndose depositar los instrumentos respectivos ante el ya referido secretario general de INTERPOL.

El Artículo 20 regla la entrada en vigor del Acuerdo, disponiendo que ella se producirá treinta días después de la fecha en que se haya depositado el quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Para los Estados que ratifiquen, acepten o aprueben el presente Acuerdo o se adhieran al mismo después de su entrada en vigor, el Acuerdo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que cada Estado haya depositado en poder del del secretario general de la OIPC-INTERPOL, su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

El Artículo 21 trata las disposiciones finales, estableciendo que los Estados Parte del Acuerdo podrán formular reservas al mismo siempre que sean compatibles con el objeto y la finalidad del mismo. Éstas solo se podrán formular en el momento de depositar el instrumento de ratificación, aceptación aprobación o adhesión y serán comunicadas inmediatamente por el secretario general a todos los países miembros del OIPC-INTERPOL. Sin embargo, si un Estado Parte presenta una notificación de denuncia ante el Secretario General de la OIPC-INTERPOL, el Acuerdo dejará de estar en vigor para dicho Estado Parte, seis meses después de la fecha en la que el mencionado secretario general haya recibido esta notificación.

Finalmente, el Artículo 22 prescribe que el Secretario General ejercerá las funciones de depositario del Acuerdo.

IV.- DISCUSION EN LA COMISION Y DECISION ADOPTADA.

Para el estudio de este proyecto, la Comisión recibió, en su sesión de fecha **9** de junio del año en curso, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, don **Francisco Pérez Mackenna**, y a la señorita **Fernanda Garcés Ramírez**, Directora General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.

La señorita **Garcés**, doña Fernanda, señaló que el acuerdo tiene por objeto establecer el marco jurídico de privilegios e inmunidades necesario para que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y su personal puedan desempeñar sus funciones con independencia y eficacia, fortaleciendo de esta forma la cooperación policial internacional entre los Estados miembros. Explicó que INTERPOL es una organización internacional integrada por 196 países, cuya finalidad es promover la asistencia recíproca entre autoridades policiales y contribuir a la prevención y represión de los delitos de derecho común.

Asimismo, indicó que el instrumento se compone de un preámbulo y 22 artículos, que regulan, entre otras materias, la personalidad jurídica internacional de INTERPOL, las inmunidades y privilegios aplicables a la organización, sus funcionarios y representantes de los Estados miembros, las facilidades financieras y exenciones tributarias necesarias para el cumplimiento de sus funciones, los mecanismos de suspensión de inmunidades, la obligación de respetar la legislación del Estado receptor, la resolución de controversias y las disposiciones relativas a su modificación, interpretación, ratificación, entrada en vigor y denuncia. Finalmente, destacó que la aprobación del acuerdo constituye un avance relevante para fortalecer la cooperación internacional frente a los desafíos que plantea la delincuencia organizada transnacional.

Las diputadas señoras **Pizarro**, **Del Real** y **Parisi**, así como el diputado señor **Schubert**, formularon consultas respecto del alcance de las inmunidades contempladas en el acuerdo, los mecanismos de control existentes para evitar eventuales abusos por parte de funcionarios de INTERPOL, las razones por las cuales dichas materias no fueron incorporadas originalmente en el estatuto de la organización, el estado de avance de la adhesión al instrumento por parte de otros países y su incidencia fiscal.

Al respecto, la señorita **Garcés**, doña Fernanda, explicó que las inmunidades reconocidas responden a estándares habituales aplicables a organizaciones internacionales y tienen por finalidad asegurar el adecuado cumplimiento de sus funciones, precisando que no constituyen beneficios personales y que pueden ser suspendidas por el Secretario General de INTERPOL cuando ello resulte necesario para el curso de la justicia o para resguardar los intereses de la organización. Asimismo, señaló que la regulación propuesta es consistente con otros acuerdos internacionales de privilegios e inmunidades suscritos por Chile y se comprometió a remitir información complementaria sobre el estado de adhesión al instrumento por parte de otros Estados.

Concluido el intercambio de opiniones y respondidas las consultas formuladas por las señoras y señores diputados, el señor Presidente puso en votación el proyecto de acuerdo.

-- Sometido a votación el proyecto de acuerdo, fue aprobado por 9 votos a favor, sin votos en contra y sin abstenciones.

Votaron a favor las diputadas señoras **Del Real**, doña Catalina; **Muñoz**, doña Francesca; **Parisi**, doña Zandra y **Pizarro**, doña Lorena, y los diputados señores **Araya**, don Cristián; **Beltrán**, don Juan Carlos; **Díaz**, don Jorge; **Martínez**, don Cristóbal y **Schubert**, don Stephan.

V.- MENCIONES REGLAMENTARIAS.

En conformidad con lo preceptuado por el artículo 302 del Reglamento de la Corporación, se hace presente que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en estudio. Asimismo, ella determinó que sus disposiciones no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido normativo del Acuerdo en trámite, la Comisión decidió recomendar a la H. Cámara aprobar este instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del Proyecto de Acuerdo, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO

“**Artículo único.** - Apruébese el “Acuerdo General sobre los Privilegios e Inmunidades de la Organización Internacional de Policía Criminal-Interpol”, aprobado en Marrakech, Marruecos, el 24 de noviembre de 2025.”.

Discutido y despachado en sesión de fecha 9 de junio de 2026, celebrada bajo la presidencia del Diputado señor **Schubert**, don Stephan, y con asistencia de las Diputadas señoras **Del Real**, doña Catalina; **Muñoz**, doña Francesca; **Parisi**, doña Zandra, y **Pizarro**, doña Lorena, y de los diputados señores **Araya**, don Cristián; **Beltrán**, don Juan Carlos; **Díaz**, don Jorge; **Martínez**, don Cristóbal; **Soto**, don Raúl, y **Venegas**, don Nelson.

Se designó como Diputada Informante a la señora **PARISI**, doña Zandra.

SALA DE LA COMISIÓN, a 9 de junio de 2026.-

Pedro N. Muga Ramírez

Abogado, Secretario de la Comisión